



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: ALBA ROSA JARAMILLO QUINTERO
Demandados: ACP – COLPENSIONES
Radicado: 05001 31 05 013 2021 00204 01
Sentencia: S-062

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el día 7 de junio de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

ALBA ROSA JARAMILLO QUINTERO demandó a la ACP COLPENSIONES, para que una vez se declare su calidad de beneficiaria del régimen de transición, sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en los términos del Decreto 758 de 1990, a partir del 27 de noviembre de 2003 cuando cumplió los 55 años de edad, junto con los intereses moratorios y las costas del proceso.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 27 de noviembre de 1948, por lo que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 35 años de edad; que cumplió los 55 años de edad el 27 de noviembre de 2003; que es beneficiaria del régimen de transición; que según la historia laboral expedida por COLPENSIONES, entre el 7 de junio de 1984 y el 30 de septiembre de 1999 acredita un total de 457.57 semanas de cotización; que algunos ciclos reflejan una serie de inconsistencias que suman un total de 122 semanas más, por lo que el total en los 20 años anteriores a la fecha de cumplimiento de los 55 años de edad, es de 579.74 semanas; que solicitó la pensión de vejez el 27 de junio de 2014; que COLPENSIONES decidió negar su solicitud según resoluciones GNR 330603 del 23 de septiembre de 2014, GNR 18586 del 28 de enero de 2015 y VPB 42844 del 13 de mayo de 2015 por no acreditar el requisito de semanas de cotización; y que no se le tienen en cuenta los aportes en mora con los empleadores INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS y M de junio a diciembre de 1994 y MANUFACTURAS PUPINO GIRALDO CIA LTDA de enero de 1998 a septiembre de 1999.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento de la demandante, el total de cotizaciones reportadas en la historia laboral, la reclamación de pensión de vejez y las consecuentes decisiones de la entidad a través de las cuales se resuelve lo solicitado. Advierte que el Acto Legislativo 01 de 2005 acabó con el régimen de transición y que la demandante no cumple con el requisito de semanas cotizadas que exigía el Decreto 758 de 1990. Se opuso a las pretensiones de la demanda y como excepciones de fondo propuso las que denominó inexistencia de la obligación, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, buena fe, improcedencia de condena en costas y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 7 de junio de 2022, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra por la demandante, a quien condenó en costas, fijando como agencias en derecho la suma de \$500.000.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación indicando que se equivoca el despacho cuando decide no puntualizar en las cotizaciones realizadas en el periodo comprendido entre enero de 1998 y septiembre de 1999. Como ya se dijo, en los distintos reportes el empleador MANUFACTURAS PUPINO GIRALDO presentaba deuda por no pago y se equivoca debido al carácter profesional de las administradoras de fondos de pensiones de custodia de la información y al trasladar la carga de la prueba al demandante de demostrar que prestó sus servicios a ese empleador, lo que es un despropósito.

Del contenido de los reportes ya mencionados se puede inferir que el demandante tuvo una relación laboral con esa empresa y se debe presumir que como trabajador dependiente cumplió con su carga de prestar el servicio y la empresa incumplió ese deber de pago de dichos aportes, por lo que COLPENSIONES reportó dichas novedades respecto del empleado como su retiro. Por esa razón, la demandada tenía el deber de desvirtuar lo manifestado en los demás reportes y decir que la empresa estaba en deuda con el empleado; los reportes de semanas cotizadas deben ser valoradas conforme a los certificados que expiden los empleadores y lo que allí está consignado y la única manera de desvirtuarlos es que entreguen argumentos donde de manera contundente desvirtúen lo que se dijo en los demás reportes.

Es inexplicable que en el reporte de 2021 aparezca una novedad de retiro cuando las demás historias laborales no lo habían registrado, sin que se hubiera acreditado por COLPENSIONES, como era su deber legal, que adelantó las gestiones de cobro pertinentes para la recuperación de esos periodos en mora. No hay una sola prueba que demuestre que la entidad haya realizado cualquier gestión para la recuperación de esos aportes, la única manera legal es decir que no tenían que realizar esa gestión porque se presentó una novedad de retiro en enero de 1998 cuando en los demás reportes nunca se mencionó tal cosa; la misión que tienen las administradoras de fondos de pensiones es tratar de manera clara todos los datos de sus afiliados y como se puede evidenciar hay innumerables inconsistencias en los reportes que presenta Colpensiones.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

En esta instancia, dentro del término concedido a las partes, el apoderado de la demandante presentó alegatos de conclusión a través de los cuales solicita se revoque la sentencia de primera instancia y se reconozca la pensión de vejez que se reclama con fundamento en el cumplimiento de las semanas mínimas de cotización que exige el Decreto 758 de 1990.

La apoderada de COLPENSIONES también hizo uso de esa oportunidad legal, solicitando confirmar la sentencia de primer grado en la que fue absuelta por falta de cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de vejez.

CONSIDERACIONES:

Según viene de verse, la señora ALBA ROSA JARAMILLO QUINTERO pretende se declare su calidad de beneficiaria del régimen de transición y en esa condición se le reconozca la pensión de vejez en los términos del Decreto 758 de 1990, lo que fundamenta en el hecho de tener

acreditados más de 35 años de edad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, además de los requisitos propios que para esa pensión se exigen.

Así entonces, y según el material probatorio obrante en el proceso, corresponde a la Sala proceder con el respectivo análisis para lo cual se hace indispensable, previamente, dejar claridad en cuanto a que no existe duda alguna acerca de las siguientes situaciones fácticas: **1)** que la señora ALBA ROSA nació el 27 de noviembre de 1948; **2)** que solicitó la pensión de vejez el 27 de junio de 2014; y **3)** que a 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, lo que en principio, al tenor de lo dispuesto en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, la haría beneficiaria del régimen de transición.

Régimen de transición que implica para ella – en aplicación del régimen anterior al cual se encontraba afiliada, es decir, el Decreto 758 de 1990 - la posibilidad de acceder a la pensión de vejez siempre y cuando acredite un total de 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo o más de 500 en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima exigida, siendo la segunda de las posibilidades mencionadas a la se acude con la demanda.

Es decir, para el caso concreto, la demandante debe acreditar cotizaciones superiores a 500 semanas entre el 27 de noviembre de 1983 y el 27 de noviembre de 2003, pues así lo exige la norma en comento, sin que sea factible pretender que dicho número se acredite en toda la vida laboral, caso en cual, la norma exige un total de 1000 semanas y sin que sea necesario además dar cumplimiento a las disposiciones del Acto Legislativo 01 de 2005 que mantuvo vigente el Régimen de Transición, como regla general, hasta el 31 de julio de 2010.

En este sentido, encuentra la Sala que la decisión adoptada por la Jueza de Primera instancia se encuentra ajustada a derecho en tanto del

estudio de las cotizaciones efectuadas pudo establecerse que no se alcanzan aportes iguales o superiores a 500 semanas durante aquel lapso de tiempo como lo exige el referido decreto 758.

A la anterior conclusión se llega si se tiene en cuenta que la interpretación que se le ha dado a la historia laboral por parte de la demandante carece de fundamento en algunos aspectos, especialmente en lo que tiene que ver con las cotizaciones presuntamente dejadas de pagar por el empleador MANUFACTURAS PUPINO GIRALDO Y CIA LTDA. Aspectos que a continuación procederá la Sala a esclarecer.

De acuerdo a las historias laborales allegadas al expediente, no existe duda alguna en cuanto a que la demandante tiene acreditadas, con total certeza, un total de 600.71 semanas de cotización en toda su vida laboral, de las cuales 460 corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida. Este número total de semanas no es suficiente para entender como cumplidos los requisitos exigidos en el Decreto 758 de 1990 para efectos de acceder a la pensión de vejez de la demandante, a quien además no se le podrán adicionar las cotizaciones que desde la demanda misma viene discutiendo como periodos en mora del empleador citado – MANUFACTURAS PUPINO Y CIA LTDA - y en lo que se insiste a través del recurso de apelación y los alegatos de conclusión presentados en esta instancia. Períodos que corresponden a los ciclos de enero de 1998 hasta septiembre de 1999, vacío éste que por lo demás, se ha vuelto de extraña e inusitada frecuencia en estos estrados judiciales.

Ello por cuanto según el registro de la historia laboral, ciñéndonos a la aportada con la demanda y visible en las páginas 18 a 20 del archivo 02Demanda del expediente virtual, MANUFACTURAS PUPINO Y CIA LTDA reportó cotizaciones continuas e ininterrumpidas desde el 11 de febrero de 1996 hasta el 1 de enero de 1998, todas ellas con las siguientes características generales: tienen la constancia de una fecha

de pago específica; aparece el reporte de un número denominado referencia de pago; y se evidencia un IBC reportado y un número de días registrados de 30 en casi todos los meses (salvo febrero de 1996 con 19 días y enero de 1998 con 1 día. Sin embargo, desde ese propio mes de enero de 1998 en adelante, los ciclos siguientes hasta septiembre de 1999, aparecen con la anotación *“Su empleador presenta deuda por no pago”*.

En este caso particular, a juicio de esta Sala no hay lugar a contabilizar todos aquellos períodos que suman un poco menos de 2 años, especialmente porque existe una historia laboral posterior y actualizada al 20 de septiembre de 2021, en donde esos ciclos en mora ya no aparecen y por el contrario se registra la novedad de retiro para aquel 1 de enero de 1998, lo que es perfectamente viable si luego de un proceso de verificación de información la entidad ha podido obtener esa conclusión.

En cualquier caso, aun haciendo caso omiso a lo que se registra en esa historia laboral actualizada, de todas maneras no es admisible que esos periodos se tengan como válidos. En la información que registra la historia laboral de COLPENSIONES aportada con la demanda, las casillas *“fecha de pago”* y *“referencia de pago”* aparecen en blanco, al igual que las casillas IBC reportado y cotización pagada, que aparecen en ceros. Lo anterior se traduce en que la relación laboral entre la demandante y la empresa MANUFACTURAS PUPINO Y CIA LTDA, no estuvo vigente durante el tiempo que se discute como no cotizado, aunque exista un reporte de mora, lo que podría tener su explicación en que el empleador omitió la obligación de retirar a la demandante del sistema.

En este punto, se ha dicho de manera reiterada atendiendo al criterio ampliamente desarrollado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que las cotizaciones en mora por parte de los

empleadores deben ser computadas cuando además la misma entidad accionada es la que deja constancia en la historia laboral de tal situación

Sin embargo, sin que ello implique desconocer el criterio jurisprudencial relacionado, a juicio de la Sala, cuando hay un cese intempestivo de cotizaciones y se reportan un sinnúmero de ciclos en mora, sin ninguna otra cotización en tal lapso, la carga de la prueba del afiliado es acreditar, siquiera sumariamente, la existencia de la relación de trabajo que alega, dado que es precisamente de tal hecho que se deriva la obligación del empleador de efectuar cotizaciones al sistema. Con ello lo que se busca es evitar que se presenten situaciones infundadas, si se tiene en cuenta que se trata, en este caso, de periodos cercanos a 2 años en los que realmente la mora aparece como inexistente, y por lo tanto no son períodos sujetos a contabilización en la historia laboral.

En múltiples casos similares al presente, ha sido criterio de la Sala que no hay lugar a incluir todos aquellos períodos que por una supuesta mora no aparecen contabilizados por la entidad de seguridad social demandada, por cuanto, si bien es cierto la Sra. ALBA ROSA había laborado durante algún tiempo con tal empleador, lo cierto es que desde el mes de enero de 1998 no existe certificación, constancia o soporte alguno que dé cuenta de la continuidad de su vinculación laboral hasta el mes de septiembre de 1999.

Se comparten así los argumentos expuestos por la Juzgadora de primer grado por cuanto no puede concluirse, sin más, que la relación laboral se haya mantenido vigente durante el lapso temporal que se pretende hacer valer sin prueba clara del hecho, así exista una constancia de mora por la inercia del sistema y no obstante que no exista constancia del retiro expreso del mismo, situación que no es infrecuente en nuestro medio. Reporte que por demás ya no aparece en las historias laborales expedidas con posterioridad, lo que da a entender que medió una

depuración y actualización adelantada por la entidad respecto a su información.

De manera concreta, la jurisprudencia laboral se ha ocupado del tema en sentencias de contornos similares, como la SL 1355 del 3 de abril de 2019, rad. 73683, la SL 263 del 29 de enero de 2020 o la SL 3852 del 14 de julio de 2021. En todas ellas se trataron casos de personas en cuya historia laboral se registraba mora en el pago de cotizaciones hasta el mes de septiembre de 1999; en la primera de ellas, por ejemplo, dijo la Corte lo siguiente:

“... en la sentencia CSJ SL 34270, 28 oct. 2008, la Sala explicó que «en los términos del art. 15 de la Ley 100/93, la condición de cotizante está dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral»; en la CSJ SL8082-2015, señaló que «los trabajadores subordinados causan la cotización con la prestación del servicio», y en la CSJ SL759-2018 sostuvo que «la cotización al sistema de pensiones se origina con la actividad que como trabajador despliega el afiliado, de manera que los aportes son consecuencia inmediata de la prestación del servicio en cuyo pago y recaudo, tienen obligación empleadores y administradoras».

(...)

Es claro entonces que los derechos pensionales y las cotizaciones son un corolario del trabajo; se causan por el hecho de haber laborado y están dirigidos a garantizar al asalariado un ingreso económico periódico, tras largos años de servicio que han redundado en su desgaste físico natural. De allí que, precisamente, para que pueda hablarse de «mora patronal» es necesario que existan pruebas razonables o inferencias plausibles sobre la existencia de un vínculo laboral, bien sea regido por un contrato de trabajo o por una relación legal y reglamentaria. Dicho de otro modo: la mora del empleador debe tener sustento en una relación de trabajo real.”

De ésta manera, para la Sala, la demandante no acredita el número mínimo de semanas de cotización que exige la ley para el

reconocimiento de la pensión de vejez que se reclama. A lo sumo, las pocas inconsistencias que se logran evidenciar son las mismas que encontró la Jueza de Primera instancia cuando hizo el estudio respectivo y que suman 30 semanas, para completar con ello 490 semanas de cotización en los 20 años previos al cumplimiento de la edad mínima requerida.

En consecuencia, la decisión de primera instancia deberá ser confirmada.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$200.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 13º Laboral del Circuito de Medellín, el día 7 de junio de 2022

Costas en esta instancia a cargo de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$200.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f0d40ebb7a60158af15506cdd8e76033623c7eb78b145eb9c8084e00077510a3**

Documento generado en 16/03/2023 01:24:15 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>